



**MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

Montevideo, 18 AGO. 2009

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley.

La importancia de la actividad pesquera en nuestro país desde el punto de vista social y económico, respaldan desde hace un tiempo la necesidad de proceder a la revisión de los aspectos normativos más importantes.

E. efecto, la Ley N° 13.833 "Riquezas del Mar" del año 1969, si bien ha permitido el desarrollo de una industria hasta hace años incipiente, debe reelaborarse, acompasándose a las necesidades reales y actuales no solo del sector, sino del país.

Consideramos que la actividad no puede atenderse solo en la fase extractiva, sino que, abarca como complejo pesquero, la comercialización, el procesamiento, el acceso a mercados internacionales, la generación directa e indirecta de puestos de trabajo, etc.

Han transcurrido casi 40 años. Sucesivos han sido los Tratados y Acuerdos que Uruguay ha celebrado, asumiendo compromisos impostergables en cuanto a la reformulación del marco legislativo en el cual se desarrolla la actividad.

Debemos asegurar que la explotación de los recursos hidrobiológicos, se realice mediante correctas pautas de manejo, que aseguren la sustentabilidad y durabilidad de los mismos.

En el plano internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, ratificada por Uruguay por Ley N° 16.287 de 29 de julio de 1992, emplaza a los Estados parte a que incorporen en su ordenamiento interno, medidas de gestión responsable de los recursos pesqueros, tanto en la zona económica exclusiva como en alta mar.

En este contexto y con igual fundamento el "Código de Conducta para la Pesca Responsable" y el "Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada" elaborados en el marco de la FAO, tienen el objetivo de orientar a los países –el nuestro entre ellos- a la adopción de medidas concretas en aras de la prosecución de los principios básicos: desarrollo sustentable, conservación y soberanía alimentaria.

En el mes de febrero del año 2008 nuestra Administración, inició un proceso participativo, convocando a la reflexión, generando un ámbito para el intercambio y la recepción de propuestas. El Primer Taller Nacional para la elaboración de una nueva ley de pesca, contó con la presencia de todos los directa e indirectamente vinculados a la actividad: trabajadores, empresarios, legisladores, otras instituciones estatales, la academia, etc.

Luego, en junio de 2008, ante una nueva convocatoria, se celebró el Segundo Taller Nacional. Se abordaron en esta instancia problemáticas más específicas y se sometió a consideración un primer esbozo de articulado.

Muchas fueron las visiones recogidas que sobre el tema existen y muchas y variadas las alternativas para algunos cambios.

Este Proyecto de Ley que se somete ante al legislativo nacional, pretende en síntesis, otorgar un marco regulador amplio, recogiendo disposiciones que se encuentran dispersas en el ordenamiento jurídico; apuesta a cumplir con los compromisos internacionales asumidos; fortalece el rol de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos; hace una gran apuesta por la acuicultura, regulando estrictamente la actividad, pero brindando estímulos para su desarrollo; enfoca particularmente a la pesca artesanal, estableciendo la zonificación y categorización como herramientas fundamentales a la hora de ordenar.

Por otra parte, el cambio en los ejes sobre los cuales actualmente funciona el sistema, permitirá no solo una mejor gestión de los recursos, facilitando el contralor y la represión de actos ilícitos, sino que además, permitirá el otorgamiento de estímulos, a quienes ejerciendo correctamente los derechos concedidos, pesquen responsablemente, fomenten el empleo de mano de obra nacional y coloquen al país en lugares de privilegio en el plano internacional.

ANEXO

El Proyecto de Ley que se somete a consideración consta de noventa y dos artículos, ordenados en once capítulos.

Capítulo I) "Disposiciones Generales". El art. 1 declara de interés general la conservación, investigación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos.

Nuestra ley vigente en su art. 1, declara de interés nacional la explotación, preservación y el estudio de las riquezas del mar.

Actualmente se entiende procedente declarar de interés general la conservación la investigación y el desarrollo sostenible, no solo de los recursos hidrobiológicos, sino también de los ecosistemas que los contienen.



Por otra parte, no se considera oportuno declarar de interés general la captura, extracción, procesamiento e industrialización, por cuanto estas actividades pueden llegar a ser contraproducentes o no recomendables. Deberá el legislador depositar en la Administración, la responsabilidad de llevar adelante los cometidos específicos que le serán atribuidos, concediéndole las facultades explícitas e implícitas necesarias para su labor.

El aprovechamiento responsable de los recursos permite junto a otras medidas, el camino a la soberanía alimentaria de un país. Debe garantizarse la diversidad y cantidad suficiente para todos; para las generaciones presentes y futuras, en un contexto de alivio de la pobreza.

El art. 2, adhiriéndose a la teoría de la declaración y recogiendo las normas contenidas en los arts. 2 de la Ley N° 13.833 y 1, 3, 4, 5, 10 y 11 de la Ley N° 17.033, consagra la dominialidad de los recursos, la jurisdicción y soberanía del Estado sobre los mismos. En efecto, éstos son dominio del dominio público cuando se encuentran en aguas de dominio público. Por tanto, la correcta administración del bien, ordenando la gestión que los particulares realizan en el ámbito de la actividad privada, es uno de los cometidos más importantes que pesa sobre la Estado en esta materia.

Queda por fuera del concepto de dominialidad aquello que hace referencia a la acuicultura. Las especies dedicadas a tal actividad, son propiedad de quienes eventualmente decidan cultivar, criar y reproducir especies bajo ambientes controlados. Sí es competencia de los organismos estatales, regular tal actividad desde el punto de vista sanitario y/o ambiental, en la medida que se puedan ver afectados ecosistemas, así como cuando la misma se planifique realizar en aguas del dominio público.

Los arts. 5 a 9 inclusive, brindan una serie de definiciones, no solo para la adecuada interpretación de la norma, sino que en lectura integrada con los artículos siguientes, introducen algunas modificaciones en el esquema tradicional de funcionamiento del sistema.

Cabe destacar que nuestra Ley vigente utiliza en más de una oportunidad indistintamente los términos permiso y autorización para identificar situaciones idénticas.

Con la intención de ajustar la terminología, hemos preferido adoptar la expresión "permiso" para el acto administrativo que confiere al titular, un derecho subjetivo del cual antes carecía: el derecho a explotar en determinadas condiciones y durante cierto período de tiempo los recursos hidrobiológicos que se encuentran dentro de la jurisdicción nacional.

La "autorización" será requerida para las actividades vinculadas con la comercialización, el transporte y el procesamiento de productos pesqueros y la acuicultura en terrenos privados.

En las definiciones planteadas, se incorporan ya alguno de los nuevos elementos del sistema: la necesidad de contar con permisos para la pesca sin importar cuál es la finalidad de la misma. La Administración necesita tener constantemente monitoreado el esfuerzo que se realiza sobre los recursos.

Capítulo II) "Administración Pesquera y Acuícola", arts. 10 a 15, se subdivide en tres Secciones a saber: Sección I) Órganos y Atribuciones;

Sección II) Consejo Consultivo de Pesca y finalmente la Sección III) Fondo de Desarrollo Pesquero y Acuícola.

Actualmente y conforme a la ley de Riquezas del Mar, todo el sistema gira en torno al Poder Ejecutivo. Dada la importancia del recurso, es lógico que sea uno de sus cometidos a través del Ministerio del ramo.

Ahora bien, dificulta el desempeño de una efectiva gestión, que la fijación de aquellas medidas tendientes a ordenar la explotación -caracterizada por el gran dinamismo y las situaciones puntuales que generalmente se presentan- esté en manos del Ejecutivo.

Corresponde resaltar en este punto la coincidencia absoluta de todos los participantes en los Talleres Nacionales en cuanto a dotar para este sector de actividad de una entidad enteramente "autosuficiente" en todos los cometidos que le conciernen.

A este respecto, se ha llegado a una primera conclusión -obviamente coyuntural conforme la cual, sin necesidad de generar una nueva estructura en el Estado, puede arribarse a la satisfacción de las inquietudes de los actores principales del sector y concomitantemente, al intento de solución para uno de los problemas detectados en estos cuatro años de gestión.

Debe resaltarse una vez más que, tratándose los recursos pesqueros de un bien de dominio público, su gestión debe estar en la órbita del Estado. Si bien se recibieron propuestas con sólidos ejemplos en derecho comparado, conforme las cuales se crearon personas de derecho público no estatal, éstos lo han sido para la investigación y no para la gestión.

En la DINARA trabajan y se capacitan los profesionales expertos en todas las materias vinculadas a la pesca y la acuicultura. Por otra parte, la forma de designación del Director Nacional, hace suponer que el jerarca de la Unidad esté en línea con el Poder Ejecutivo.

En la época de sanción de la Ley N° 13.833 era lógico que el Organismo vinculado (SOYP) no tuviese una intervención preponderante en la gestión de los recursos. Cabe recordar que tenía un rol bien diferente al actual: concurría en la explotación en pie de igualdad con los particulares.

Por ello, mal podía ser además quien tuviese la potestad de decidir quién pescaba, en qué condiciones y con cuáles reglas.

Hoy en día tan diferente es su inserción en el sistema, que se hace imprescindible otorgarle atribuciones que resulten en una mejora sustancial para el efectivo contralor y el fortalecimiento de la Institución.

Los permisos, autorizaciones y concesiones serán otorgadas por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, previa solicitud del interesado ante la DINARA (actividad ésta que hoy realiza en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo).

Por otra parte, y sin perjuicio de la facultad de delegar en el Director General de la DINARA el otorgamiento de los títulos respectivos, cometer por Ley una serie importante de atribuciones, permite fortalecer la Institución y mejorar la gestión.

La Sección II) recoge una sugerencia FAO y una propuesta de los actores del sector: se crea un órgano consultor asesor del Poder Ejecutivo en materias vinculadas a la pesca. Su integración será múltiple, estando representado el Estado, los particulares y el sector laboral.

La Sección III) pretende dotar de cometidos más específicos al Fondo de Desarrollo Pesquero y Acuícola ya existente y operativo. En coordinación con las normas atributivas de competencia e inspirado en los primeros



artículos de esta Ley, la Administración deberá ser capaz de diagramar y desarrollar programas de investigación, intervenir eficaz y efectivamente en la pesca artesanal, dotar de tecnología y trabajo constante en la actualización a los técnicos y fomentar el desarrollo en la acuicultura.

Capítulo III) "Medidas Generales de Ordenación Pesquera y Acuícola"

Comprende los artículos 16 a 27 inclusive y recoge varias disposiciones ya existentes.

Cabe resaltar no obstante dos normas conceptualmente fundamentales: la introducción del criterio de precaución en la formulación de políticas pesqueras y confección de normas y los criterios para la determinación de las vedas.

FAO en el Código de Conducta para la Pesca Responsable (art. 7.5), promueve que los Estados adopten el criterio de precaución a la hora de normar, de modo tal que la carencia de información científica, no sea óbice para tomar decisiones adecuadas al estado de los recursos.

Los artículos destinados a los Inspectores (24 y 25), aclaran las potestades que sin lugar a dudas deben tener éstos, dejando además en evidencia la necesidad que hoy día existe de reforzar la cantidad de personal destinado a las tareas inspectivas, así como las técnicas empleadas y la indispensable colaboración con y de la autoridad marítima.

Finalmente, la potestad de inspeccionar buques extranjeros que se encuentren en puertos nacionales así como en aguas internacionales, sumado al claro tenor del art. 4 inc. 2, nos permite adelantar que la responsabilidad que recae sobre el Estado del puerto, así como las recomendaciones contenidas en el "Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada" (FAO 2001), están siendo eficazmente recogidas.

Capítulo IV) "Régimen de Acceso a la Actividad Pesquera". Es uno de los más importantes en lo que a propuestas de cambios refiere (artículos 28 a 46 inclusive)

U.- efectivo contralor en cuanto a quienes realmente acceden a los recursos pesqueros; el retiro del comercio de los hombres de los permisos y autorizaciones; la necesidad de contar con garantías generales y especiales; la no procedencia de indemnización alguna en las hipótesis de suspensión, revocación y caducidad y la eventualidad de fijar pago por derechos de acceso, hacen que arribemos a una nueva forma de pescar en aguas continentales y marítimas.

Si bien los sistemas en derecho comparado muestran diferencias en cuanto a la organización del acceso a la actividad, hemos de fundar en qué principios generales puede asimilarse el régimen de innegociabilidad que se propone, con referencia a alguno de los ordenamientos.

a.- España, confiere la licencia al buque. El art. 23 numeral 1 Ley N° 3/2001, establece que todo buque debe contar con una licencia. Por su parte el numeral 2 de la misma norma dispone que la misma es intransferible.

La hipótesis de transmisión del buque, apareja la subrogación en la licencia.

b.- Argentina (Ley N° 24.922) regula un sistema conforme el cual se confiere un permiso al buque que le permite acceso al caladero, siendo necesario para poder desarrollar la actividad, contar con una asignación de cuota.

(arts. 27 y 28). Asimismo, lo transferible es el permiso de buque a buque, siempre y cuando tengan capacidad equivalente (art. 30).

c.- A diferencia de los regímenes citados supra, Chile (Ley N° 18.892 que regula en capítulos diversos la pesca industrial y la pesca artesanal), dispone que: para ejercer la actividad industrial (art. 15), se requiere contar con una autorización a esos efectos. La misma no puede enajenarse, arrendarse ni constituir a su respecto derecho alguno a favor de terceros, salvo los casos de transmisibilidad (inciso 6).

Para el caso de los pescadores artesanales, existe una excepción al régimen general de prohibición. La norma prevé que en caso de fallecimiento, la sucesión, representada por mandatario habilitado, solicite la reserva de la vacante.

Afirmamos que nuestra propuesta de declarar no negociable a cualquier título el permiso, es una decisión fundamental pero no exclusivamente política.

Su fundamento radica en la necesidad de fiscalizar quién detenta efectivamente el derecho a desarrollar la actividad extractiva, comprometiendo su responsabilidad, facilitando concomitantemente, la correcta intervención de la Administración en sus deberes de vigilancia y contralor.

Una actividad donde prime la pesca responsable, donde existan titulares identificados e identificables, en la cual se impongan garantías para el Estado, debe entenderse como una práctica deseable y esperada, en la cual todos los involucrados se vean altamente beneficiados.

Por otra parte, los titulares accederán a un permiso por plazos más largos, las medidas generales y especiales de ordenamiento estarán más claras y ello devendrá en garantía para el correcto ejercicio de sus derechos.

Con referencia a la Pesca Deportiva, la innovación radica en la introducción del permiso y la prohibición absoluta de comercializar de cualquier modo el producto obtenido, salvo la existencia de convenios de investigación.

Capítulo V) “Régimen General para la Pesca Artesanal”. Se dedica enteramente a la Pesca Artesanal, actividad ésta que por su importancia económica y social requería una regulación específica.

Es así que se introducen los criterios de equidad y acceso preferencial a las poblaciones locales; la diferenciación entre el armador artesanal y el armador a pequeña escala, la creación de los Consejos Zonales Pesqueros y la introducción del pago de tributos y derechos de acceso, como herramienta tendiente a profesionalizar la actividad y regularizar la condición de los pescadores, ingresándolos al sistema formal.

La categorización permitirá identificar y aplicar regímenes diferentes a realidades diversas, arribando a soluciones más equitativas.

Capítulo VI) “Registro, Información y Control”. La actividad registral adquiere vital importancia para la gestión. Se especifican cuáles habrán de ser como mínimo los datos relevantes de registración, los cuales no solo estarán directamente vinculados con el acceso a un permiso, autorización o concesión y su mantenimiento por parte de los particulares, sino que además servirán de insumo a las Áreas Técnicas de la Institución.

Capítulo VII) “Desarrollo, Fomento y Régimen de Acceso a la Acuicultura”. Se enfoca a la Acuicultura, actividad ésta que aunque incipiente, requiere de normas tanto vinculadas al control medioambiental,



como al fomento. Se instala la ventanilla única como forma de facilitar las tramitaciones de las autorizaciones para los particulares.

Se deja al Poder Ejecutivo la Zonificación del país, brindándosele los elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar los mejores espacios físicos.

Con igual sentido que en la actividad pesquera, se crea el Consejo Consultivo de Acuicultura, órgano integrado por los particulares y el Estado, cuyo rol será el asesoramiento no vinculante en la materia.

Considerando las costosas inversiones así como el plazo de retorno, las autorizaciones y concesiones para el desarrollo de proyectos de acuicultura se otorgarán por diez años, siendo por un período de cinco años los beneficios fiscales tendientes al fomento de la actividad.

Capítulo VIII) "Procesamiento, Transporte y Comercialización". Merece mayor destaque la introducción de las "autorizaciones" para desarrollar las actividades enunciadas, las cuales serán otorgadas por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como la introducción de la obligación de portar y exhibir la "documentación" que acredite el origen del producto. Tal requisito no solo está vinculado directamente con la trazabilidad del mismo, sino también con el contralor y la detección de la pesca ilegal.

Capítulo IX) "Coordinación y Cooperación Interinstitucional". Si bien no es una novedad normativa, sí pretende recoger una práctica diaria de todos los organismos estatales vinculados, reforzando la idea de cooperación y coordinación, en la medida que las competencias naturalmente delimitadas en las normas de creación, se funden y confunden necesariamente a la hora de efectivizarlas.

Capítulo X) "Infracciones y Sanciones". Corresponde destacar que se propone un cambio esencial. Hoy en día la facultad de determinar la configuración de una infracción y establecer la sanción pertinente, radica en los Servicios Jurídicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La propuesta que se somete a consideración pretende devolver a la hoy DINARA la facultad de intervenir en sede infraccional administrativa. Obviamente los Servicios Jurídicos han de tener el rol natural que les cabe, esto es, asesorar técnicamente y promover los procesos contenciosos que correspondan. Pero la responsabilidad de determinar y aplicar la legislación habrá de recaer en el jerarca de la Dirección especializada.

No violenta los derechos de los particulares que quien administra intervenga a la hora de decidir si se ha cometido una infracción a la norma administrativa. De hecho el sistema funciona así en el Estado (Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados), así como en las figuras correspondientes a las personas de derecho público no estatales, estando previstos en la Constitución de la República los medios recursivos administrativos y jurisdiccionales pertinentes.

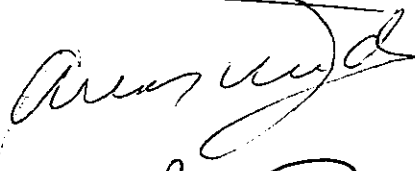
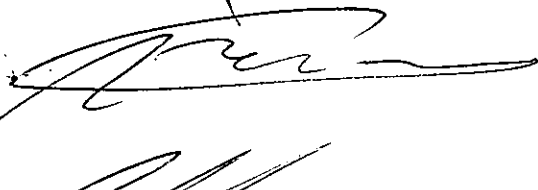
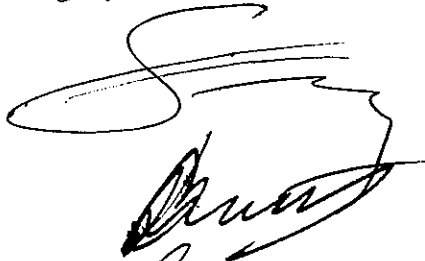
Este Capítulo, de especial relevancia, introduce una suerte de tipificación de figuras infractoras no taxativo, una graduación de las sanciones a aplicar, el concepto de responsabilidad subjetiva y directa, el aumento de los mínimos y máximos en las sanciones pecuniarias, el peso de los antecedentes en la

actividad pesquera y las facultades de adoptar medidas urgentes en situaciones de in fraganti violación a las normas.

Capítulo XI) Se derogan tácitamente las normas que se opongan directa e indirectamente a la Ley y se brinda un plazo de 180 para dictar la reglamentación pertinente.



Dr. TABARÉ VAZQUEZ
Presidente de la República





**PROYECTO:
"LEY DE PESCA RESPONSABLE Y FOMENTO DE LA
ACUICULTURA"**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1.- Interés general y soberanía alimentaria. Se declara de interés general la conservación, la investigación, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que los contienen

Se reconoce que la pesca y la acuicultura son actividades que fortalecen la soberanía territorial y alimentaria de la nación.

Artículo 2.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen legal de la pesca y la acuicultura, con el fin de asegurar la conservación, la ordenación, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que los contienen en el territorio nacional y en las aguas, tanto continentales como marítimas, sobre las que el Estado ejerce su soberanía y jurisdicción

Artículo 3.- Soberanía y Jurisdicción. El Estado ejerce su soberanía, su dominio y su plena jurisdicción sobre los recursos hidrobiológicos que se encuentran en forma permanente u ocasional en aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental uruguaya, como asimismo en las áreas adyacentes de jurisdicción nacional, conforme a las leyes y tratados internacionales.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente Ley se aplican a la pesca y a la acuicultura de los recursos hidrobiológicos que se realicen en el territorio y en las aguas a que se refiere el artículo 2. Se aplican a la captura o extracción y a las demás operaciones pesqueras y acuícolas, al procesamiento, al transporte y al comercio de los productos hidrobiológicos y a la investigación y ordenación de la pesca y la acuicultura.

Las disposiciones de la presente Ley se aplican igualmente a las embarcaciones pesqueras de bandera uruguaya que operen en aguas fuera de su jurisdicción, de conformidad con los acuerdos y convenios internacionales.

Artículo 5.- Definiciones: Pesca y Acuicultura. A los efectos de la presente Ley, se entiende por:

a.- Pesca, la captura, la posesión, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización y la comercialización responsables de los recursos pesqueros.

b.- Acuicultura, la actividad de reproducción, cultivo o crianza de especies hidrobiológicas en medio controlado, abarcando ciclos biológicos completos o parciales, incluyendo las actividades realizadas en estructuras ubicadas en ambientes acuáticos marinos, continentales y en tierra.

Artículo 6.- Definiciones de pesca en función del espacio. La pesca se clasifica, en función del espacio en que se realiza, en:

a.- Pesca Marítima, cuando se realice en el mar, estuarios y zonas litorales en comunicación con el mar.

b.- Pesca Continental, cuando se realice en cursos de aguas naturales y en zonas inundables aledañas. Incluye la pesca en ríos, lagos, lagunas y arroyos, estanques, embalses naturales o artificiales o cualquier otro cuerpo de agua dulce.

Artículo 7.- Definiciones de pesca en función de la finalidad. La pesca se clasifica, en función de su finalidad, en:

a.- Pesca de subsistencia, cuando se realice con el único propósito de satisfacer necesidades alimenticias propias o de la familia.

b.- Pesca comercial, cuando la captura se realice con fines comerciales.

c.- Pesca deportiva, cuando se realice por deporte, turismo, placer o recreación.

d.- Pesca de investigación científica, cuando se trate de pesca de exploración, experimentación, conservación, estudio de poblaciones y de repoblación, de exhibición en acuarios o museos o, en general, de pesca con fines de investigación científica o tecnológica.

Artículo 8.- Definiciones de pesca en función de las características de las embarcaciones y de las artes de pesca empleadas. Se clasifica en:

a.- Pesca Artesanal: Aquella que cumpla con las características respecto al tamaño de la embarcación, la que no podrá superar las 10TRB y, utilice las artes de pesca que DINARA establezca para cada zona de pesca.

Considérase pesca artesanal desde tierra, a aquella que se realiza sin ayuda de una embarcación o que utilizándola como auxilio para la extracción del producto, no verifica operación ninguna de estiba a bordo.

b.- Pesca Industrial: Es la pesca que no reúna las condiciones y requisitos para ser considerada pesca a pequeña escala o artesanal.



Artículo 9.- Definiciones relacionadas con el régimen de acceso. A los efectos de la presente Ley, el régimen de acceso a las diversas fases del aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos se regula mediante el otorgamiento de:

a.- Permisos de Pesca. El Permiso de Pesca constituye un derecho otorgado a una persona física o jurídica, con relación a una embarcación concreta, por un plazo establecido, para realizar faenas de pesca de ciertas especies y bajo determinadas condiciones en aguas jurisdiccionales o en alta mar. Se podrán emitir cinco clases de Permisos: **Permiso de Pesca de Subsistencia, Permiso de Pesca Comercial Artesanal, Permiso de Pesca Comercial Industrial, Permiso de Pesca Deportiva, y Permiso de Pesca de Investigación Científica.**

b.- Autorización. La autorización es un derecho reconocido a personas físicas o jurídicas para que puedan dedicarse al procesamiento, la transformación total o parcial, al acopio y transporte, a la comercialización de los productos hidrobiológicos o al ejercicio de la acuicultura. Se emitirán cuatro clases de autorizaciones: **Autorización de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos, Autorización de Transporte de Productos Hidrobiológicos, Autorización de Comercialización de Productos Hidrobiológicos y Autorización de Acuicultura.**

c.- Concesiones. La concesión es un derecho otorgado a personas físicas o jurídicas para que puedan disponer, de modo exclusivo o cuasi-exclusivo, de espacios, fondos o aguas marinas o continentales, de dominio público, para el desarrollo de actividades de acuicultura.

CAPÍTULO II ADMINISTRACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA

Sección I.- Órganos y atribuciones

Artículo 10.- Órgano Responsable. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el órgano responsable de la política vinculada a los recursos hidrobiológicos de conformidad con la presente Ley.

Artículo 11.- Cometidos del Poder Ejecutivo: Son cometidos especiales del Poder Ejecutivo en materia pesquera:

1.- Acordar con los Ministerios competentes, el establecimiento y la regulación de los sitios de desembarque y acopio de productos pesqueros.

2.- Promover la armonización legislativa con otros países en materia de sanidad e inocuidad alimentaria a fin de favorecer la comercialización de los productos pesqueros uruguayos.

3.- Suscribir convenios o acuerdos internacionales sobre todos los aspectos relativos a la pesca y la acuicultura, previa consulta con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

4.- Proponer las medidas tendientes al fomento de la acuicultura.

Artículo 12.- Cometidos y atribuciones de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA). Corresponde a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos:

1.- La orientación, el fomento y desarrollo, en todos sus aspectos, de las actividades relacionadas con el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, de los ecosistemas que los contienen y de las industrias derivadas, a nivel público y privado.

2.- La promoción para la participación activa en la administración de los recursos hidrobiológicos de todas las personas interesadas a través del Consejo Consultivo de Pesca; del Consejo Consultivo de Acuicultura y de los Consejos Zonales Pesqueros

Son atribuciones de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, entre otras:

a.- Ejecutar y controlar el cumplimiento de todas las actividades vinculadas con la pesca y la acuicultura, de conformidad con la presente Ley.

b.- De conformidad con la reglamentación que se dicte, siguiendo los procedimientos y criterios que en esta se indiquen, proceder a:

1) Recepcionar las solicitudes de permisos, autorizaciones y concesiones, las que serán otorgadas en todos los casos por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

2) Actuar como la autoridad oficial competente en materia de sanidad e inocuidad alimentaria de los productos pesqueros y acuícolas, expidiendo los certificados que correspondan a nivel nacional e internacional.

3) Actuar como la autoridad oficial competente en materia de sanidad e inocuidad alimentaria de las especies sujetas a cultivo.

4) Fijar talla y peso mínimo de desembarque de las especies susceptibles de captura;

5) Determinar las artes y los métodos de pesca.



- 6) Establecer épocas, especies y zonas de veda, así como zonas de reservas, refugios o viveros, considerando entre otros, criterios ecosistémicos y hábitats críticos.
- 7) Determinar las cuotas y el volumen de captura permitida así como a modificar cuotas o volumen en casos excepcionales.
- 8) Establecer un sistema nacional de información pesquera y acuícola, incluyendo los registros que fueren oportunos.
- 9) Prohibir, si lo considerase apropiado, la permanencia de embarcaciones pesqueras en las zonas de veda, así como en zonas de reservas, refugios o viveros.
- 10) Fijar y modificar los porcentajes de desembarque por especies respecto al desembarque total, tomando en consideración la modalidad de pesca, la especie y la interdependencia de las poblaciones.
- 11) Declarar, en su caso, plenamente explotado un determinado recurso o conjunto de recursos pesqueros.
- 12) Establecer zonas y sub zonas para la mejor administración de los recursos pesqueros explotados por pescadores artesanales.
- 13) Proponer al Poder Ejecutivo medidas de incentivo con respecto a aquellas actividades que conducen al desarrollo sostenible de la pesca y el fomento de la acuicultura.
- 14) Promover la investigación científica en cuanto sea necesaria para la correcta administración de los recursos hidrobiológicos y a tal fin, establecer y administrar estaciones de acuicultura, viveros, estaciones y centros y áreas de repoblación.
- 15) Investigar, proyectar y administrar cualquier modalidad de explotación de los mamíferos marinos.
- 16) Controlar la manipulación, industrialización, transporte, distribución y comercialización de los productos hidrobiológicos y de sus derivados y de las actividades necesarias a ese fin, con destino al mercado interno o externo, en coordinación con las demás autoridades competentes.
- 17) Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo relacionado a la pesca, la caza acuática y la acuicultura.
- 18) Actuar como organismo de contralor de las actividades directa o indirectamente vinculadas a la pesca o acuicultura que deriven de acuerdos o tratados internacionales.

19) Proponer al Poder Ejecutivo los representantes en las comisiones nacionales o internacionales que el país integre en materia pesquera y acuícola.

20) Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos con los organismos internacionales en los cuales el Estado participe y suscriba en materia pesquera y acuícola y de conservación de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas que los contienen.

21) Promover el desarrollo de la Acuicultura en todas sus etapas productivas, mediante actividades de investigación, extensión y divulgación.

22) La determinación de sanciones, cuando considere que existieron infracciones a la presente ley, acuerdos internacionales suscritos por el Estado, disposiciones reglamentarias o resoluciones, todo ello en coordinación con la División Servicios Jurídicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

23) Percibir y afectar los ingresos económicos derivados del pago de precios, tasas, derechos de acceso y multas por infracciones, de acuerdo a la normativa vigente.

Sección II.- Consejo Consultivo de Pesca.

Artículo 13.- Consejo Consultivo de Pesca. Créase el Consejo Consultivo de Pesca como órgano asesor del Poder Ejecutivo en todas las materias relacionadas con la pesca.

El Consejo formará un ámbito de intercambio participativo de ideas y propuestas, sin que las mismas tengan carácter vinculante para la Administración.

Artículo 14.- Miembros del Consejo Consultivo de Pesca. El Consejo Consultivo de Pesca funcionará bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y estará integrado por:

1.- El Director General de la DINARA, quien actuará como Presidente.

2.- Un representante del Ministerio de Defensa

3.- Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores

4.- Un representante del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente

5.- Un representante de los armadores industriales.



6.- Un representante de los pescadores artesanales.

7.- Un representante de las empresas que se dedican a la transformación de los productos pesqueros.

8.- Un representante del sector laboral pesquero.

El Consejo podrá convocar a los organismos y dependencias con competencias específicas vinculadas a la pesca, cuando sea requerido su asesoramiento.

Los miembros designados participarán en forma honoraria.

Sección III.- Fondo de Desarrollo Pesquero y Acuícola.

Artículo 15.- Cometidos.- Sin perjuicio del destino dado a los ingresos que actualmente tiene el Fondo de Desarrollo Pesquero creado por el art. 200 de la Ley 16.320 de 1 de noviembre de 1992, en la denominación dada por el art. 270 de la Ley 16.736 de 1º de Enero de 1996, que pasará a denominarse "*Fondo de Desarrollo Pesquero y Acuícola*", asígnasele entre otros:

a.- El cometido de promover el desarrollo pesquero nacional y todas aquellas actividades directamente vinculadas con las atribuciones otorgadas por el art. 12 de la presente Ley a la DINARA.

b.- Fomentar la investigación pesquera con el fin de obtener la información científica y tecnológica necesaria para conservar y promover la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos hidrobiológicos nacionales.

c.- Gestionar por sí, o a través de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, llamados a concurso público para la realización de proyectos de investigación y seleccionar los proyectos a ejecutar.

d.- Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en la acuicultura.

El Poder Ejecutivo reglamentará los requisitos que deberán reunir los interesados y las condiciones de acceso para los proyectos de financiamiento de las actividades para el fomento y desarrollo acuícola.

CAPÍTULO III
MEDIDAS GENERALES DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA
Sección I.-

Artículo 16.- Criterio de precaución. En la formulación de políticas y en la elaboración y aplicación de la legislación pesquera, deberá respetarse el criterio de precaución en la conservación, ordenación y explotación de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas que los contienen, de conformidad con la presente Ley y, en particular, con los compromisos asumidos en el marco de la celebración de acuerdos en materia pesquera.

Artículo 17.- Criterios de veda. En la determinación de los períodos de veda, la DINARA tendrá en cuenta entre otros elementos:

- Las investigaciones científicas disponibles.
- El criterio de precaución de acuerdo a lo establecido por el art. 7.5 del Código de Conducta para la Pesca Responsable.
- La relación de los diversos usuarios de los recursos pesqueros entre sí y de éstos, con el espacio físico en el cual se desarrolla la actividad.

Artículo 18.- Limitación del esfuerzo de pesca. En consideración a la preservación y adecuada explotación de los recursos hidrobiológicos, el Poder Ejecutivo podrá disponer la limitación del número de embarcaciones dedicadas a la pesca comercial así como el esfuerzo de pesca de las mismas.

Artículo 19.- Importación y exportación de especies. Prohíbese la importación y el tránsito en territorio nacional de especies exóticas, vivas o en cualquier etapa de su desarrollo, así como su introducción en aguas de jurisdicción nacional.

Asimismo, prohíbese la exportación de especies vivas, cualquiera sea su estado de evolución.

DINARA podrá, previo dictamen de sus cuerpos técnicos, autorizar actividades de importación y exportación.

Artículo 20.- Traspordo. Se prohíbe el traspordo en aguas y en puerto, de productos provenientes de la actividad pesquera, salvo que se trate de exportación, en cuyo caso el traspordo deberá realizarse siempre en puerto y bajo el control de autoridades competentes.

La DINARA podrá autorizar, mediante resolución fundada, el traspordo de productos en el mar con destino a puertos nacionales, cuando considere que tal operación es apropiada por razones técnicas debidamente acreditadas y, bajo control de la autoridad competente.



Artículo 21.- Pesca con veneno o explosivos. Se prohíbe toda forma de explotación de los recursos hidrobiológicos mediante la utilización de venenos o explosivos o cualquier otra práctica que cause efectos destructivos, así como el vertido de sustancias que en cualquier forma destruyan el ecosistema.

Artículo 22.- Cese de abanderamiento. El cese de abanderamiento nacional de una embarcación pesquera conllevará la caducidad de pleno derecho del permiso de pesca otorgado con referencia a dicha embarcación.

La Prefectura Nacional Naval deberá comunicar en forma simultánea a la DINARA la resolución por la que se establezca el cese de bandera nacional de los buques pesqueros, a efectos que la DINARA tome las medidas pertinentes.

Artículo 23.- Modernización de la flota. Con el objetivo de modernizar la flota pesquera nacional, la DINARA podrá autorizar la sustitución definitiva de las embarcaciones pesqueras. Asimismo, en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, podrá autorizar la sustitución temporal de embarcaciones pesqueras.

El interesado deberá acreditar siempre las características de la embarcación, presentar un análisis de las condiciones de impacto sobre el recurso explotado, así como todas aquellas especificidades que se le requieran a efectos de pronunciarse acerca de su solicitud.

Sección II.- Inspectores

Artículo 24.- Inspectores. A fin de controlar el cumplimiento de todas las actividades vinculadas con la pesca y la acuicultura, de conformidad con la presente Ley, DINARA ejercerá acciones de inspección y vigilancia y, a este efecto, contará con personal afectado a los servicios inspectivos.

Artículo 25.- Autoridad de los Inspectores. En el ejercicio de sus funciones, estarán investidos de autoridad suficiente para:

a.- Acceder e inspeccionar locales, establecimientos, vehículos o áreas específicas donde se depositen, transporten, procesen o comercialicen productos de la pesca o la acuicultura, así como donde se cultiven crías de especies y para exigir, a quien corresponda, la información que permita verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.

b.- Acceder e inspeccionar libremente a los buques pesqueros de bandera nacional, incluso cuando se encuentren en puertos extranjeros.

c.- Acceder e inspeccionar buques extranjeros que se encuentren en puertos nacionales o en aguas bajo la jurisdicción de Uruguay. Podrán acceder a buques extranjeros en aguas internacionales para el cumplimiento de los acuerdos en los cuales el país sea parte.

d.- En su caso, proceder a intervenir preventivamente e incautar los equipos, vehículos, bienes, artes de pesca o productos hidrobiológicos que hayan sido utilizados en la comisión de una infracción, de conformidad con la presente Ley y demás normas de aplicación, pudiendo requerir, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública.

Para el ejercicio de las funciones de acceso e inspección, los funcionarios inspectores no necesitarán autorización de ninguna otra autoridad administrativa o judicial.

Sección III.- Observadores

Artículo 26 .- Facúltase a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, previa conformidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para proceder a la designación o la contratación, de observadores técnicos nacionales para embarcar en los buques pesqueros a efectos del cumplimiento de las tareas de observación y documentación de las operaciones de pesca, de proceso industrial, investigación y suministro de toda la información científica, biológica y técnica que le sea requerida por la Dirección.

Artículo 27.- El Presidente de la República en acuerdo con los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas y previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fijará anualmente el importe que por concepto de viáticos percibirán los observadores a que refiere el artículo anterior.

Dicho importe será fijado teniendo en cuenta las características, condiciones y términos de las campañas a ser realizadas por la embarcación de que se trata y será abonado por los titulares de permisos de pesca a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Los titulares de permisos de pesca estarán obligados asimismo a proporcionar alojamiento y alimentación a los citados observadores

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA

Sección I.- Disposiciones Generales

Artículo 28.- Titularidad. El acceso a la explotación de los recursos pesqueros y acuícolas solamente podrá ser concedido a personas físicas



o jurídicas, domiciliadas en el territorio de la República, que hayan obtenido los permisos correspondientes y cumplan con las demás condiciones establecidas por la presente Ley y su reglamentación.

Tratándose de personas jurídicas privadas, podrán ser titulares de permisos de pesca, cuando la totalidad de su capital social esté representado por cuotas sociales o acciones nominativas, cuya titularidad corresponda íntegramente a personas físicas.

El Poder Ejecutivo, previa solicitud del interesado y por resolución fundada, podrá exceptuar de lo previsto en el inciso anterior, a las personas jurídicas privadas que, por la cantidad de integrantes, accionistas, o por la índole de la empresa, impida que el capital social pertenezca exclusivamente a personas físicas.

Artículo 29.- Pagos de derechos por el acceso. Podrá establecerse por el Poder Ejecutivo el pago de derechos de acceso por concepto de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. Se podrá eximir del pago de tales derechos a los titulares de Permisos de Pesca de Investigación Científica.

La pesca de subsistencia estará exenta del pago de cualquier precio o tributo.

Artículo 30.- Determinación de la cuantía de los derechos. La cuantía de los derechos debidos por los permisos, se fijará por el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la DINARA.

Artículo 31.- Criterios de acceso. La DINARA podrá conceder el acceso o negarlo teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad a largo plazo de los recursos hidrobiológicos, el de proporcionalidad entre esfuerzo pesquero o extractivo y capacidad de producción, la ordenación integral y, los antecedentes del solicitante, así como los factores socioeconómicos y ambientales pertinentes.

Artículo 32.- Inicio del procedimiento de acceso. Las personas físicas o jurídicas que deseen acceder a las actividades pesqueras deberán presentar ante la DINARA y luego de la aprobación del Proyecto de Manejo, una solicitud de permiso, autorización o concesión, según los procedimientos que establezca la reglamentación. Tendrán preferencia aquellos solicitantes que acrediten la utilización de tecnologías adecuadas, así como la utilización de embarcaciones de construcción nacional.

Artículo 33.- Constitución de garantías. Para el otorgamiento de un permiso de pesca a persona física o jurídica, nacional o extranjera, se exigirá la constitución de garantía suficiente del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa nacional e internacional, independientemente de los daños y perjuicios que se pudieren reclamar. Exceptúese de esta obligación a los titulares de Permisos de Pesca de Subsistencia y a los titulares de Permisos de Pesca Artesanal.

Cuando el solicitante no detente la propiedad del buque a emplear, además de la garantía prevista en el inciso anterior, deberá cumplir con las obligaciones accesorias que imponga la reglamentación.

Artículo 34.- Tasas. El Poder Ejecutivo a propuesta de la DINARA, fijará anualmente el importe de las tasas que gravarán la expedición de los permisos, concesiones, autorizaciones e inspecciones que realice.

Artículo 35.- Plazo y contenido de los permisos. Los permisos de pesca serán otorgados en las siguientes condiciones:

a.- El plazo de vigencia del permiso será de 5 (cinco) años. Dicho plazo podrá ser extendido por plazos iguales en las condiciones que se fijen por vía reglamentaria.

b.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal anterior, el plazo de vigencia de los permisos podrá ser de 10 años cuando se trate de buques pertenecientes a empresas con instalaciones de procesamiento radicadas en el territorio nacional, que procesen y elaboren en forma continua productos pesqueros. Dicho plazo podrá ser extendido por períodos iguales en las condiciones que se fijen.

Entre otras, se establecerá por vía reglamentaria las condiciones para su renovación, así como las causales de suspensión, caducidad o revocación de los mismos.

Los permisos contendrán las especificaciones en cuanto a métodos y artes de pesca para el tipo de pesquería de que se trata.

Artículo 36.- Negociabilidad e inembargabilidad.- Prohíbese la realización de cualquier negocio jurídico que involucre permisos, concesiones y/o autorizaciones, ya sea a título gratuito u oneroso, aparezcan o no transferencia en la titularidad. Los acuerdos que se realicen en contravención a la presente prohibición, serán nulos y se aplicarán las máximas sanciones previstas en el Capítulo X).

Exceptúese de la prohibición prevista en el inciso anterior, a los casos de transferencia por causa de muerte del titular.

Los permisos de pesca serán inembargables.



Artículo 37.- Caducidad del permiso por inactividad. La inactividad de una embarcación en pesquerías en plena explotación, durante el período que determine la reglamentación de acuerdo a cada especie objetivo, el cual no podrá exceder de 120 (ciento veinte días), conllevará la caducidad del permiso

Artículo 38.- Indemnización. La revocación, suspensión o declaración de caducidad de los permisos y autorizaciones, no dará derecho a reclamo ni indemnización alguna

Artículo 39.- Inscripción de embarcaciones. Las embarcaciones empleadas en la actividad pesquera, deberán acreditar la inscripción en la matrícula nacional y enarbolar pabellón nacional.

Artículo 40.- Cupos derivados de acuerdos internacionales. El otorgamiento de derechos para acceder a la explotación de cupos derivados de acuerdos internacionales, se regirá por los mismos criterios utilizados para el otorgamiento de permisos para la explotación de recursos nacionales, sin perjuicio de las cláusulas específicas que nuestro país hubiere pactado en dichos acuerdos.

Sección II.- Pesca de Investigación Científica.

Artículo 41.- Proyectos específicos. Las personas físicas o jurídicas que deseen obtener un permiso de pesca con fines científicos o docentes deberán presentar un proyecto específico y acreditar el cumplimiento de los requisitos que establezca la presente Ley y su reglamentación

Artículo 42.- Limitaciones del Permiso de Pesca de Investigación Científica. El permiso de pesca con fines científicos o docentes contendrá las limitaciones específicas que DINARA considere oportuno establecer y el período por el cual será otorgado, el cual no podrá exceder de un año.

Por resolución fundada se podrá renovar el plazo del permiso, por una sola vez, por igual período y en las condiciones que la DINARA estime convenientes.

Artículo 43.- Permiso de Pesca de Investigación Científica de ciertas especies. El permiso de pesca con fines científicos o docentes podrá otorgarse incluso para el estudio de especies declaradas plenamente explotadas o en peligro de extinción.

Artículo 44.- Permiso de Pesca de Investigación Científica para embarcaciones extranjeras. Excepcionalmente y por razones fundadas,

podrán concederse permisos de pesca con fines científicos o docentes a buques extranjeros.

Sección III.- Pesca Deportiva

Artículo 45.- Condiciones particulares del Permiso de Pesca Deportiva. La pesca deportiva podrá ejercerse previa obtención de Permiso de Pesca Deportiva, en el que se establecerá las condiciones particulares respecto a especies, períodos y artes empleadas, de conformidad con la reglamentación.

Artículo 46.- Comercialización de los productos de la pesca deportiva. Los productos obtenidos de la pesca deportiva no podrán ser objeto de comercialización y solo podrá autorizarse su exportación cuando existan convenios de investigación suscritos por la autoridad competente.

CAPÍTULO V RÉGIMEN GENERAL PARA LA PESCA ARTESANAL Disposiciones Generales.

Artículo 47.- Equidad y acceso preferencial a poblaciones locales.- La DINARA velará por la equidad de acceso a los recursos pesqueros de todas las embarcaciones y categorías y facilitará cuando proceda, el acceso preferencial a los recursos pesqueros y acuícolas a las poblaciones locales.

Artículo 48.- Armador artesanal.- Se considerará armador artesanal a la persona física titular de un permiso de pesca, con embarcaciones que no superen las 10TRB. Sin perjuicio de las disposiciones generales previstas en esta Ley, se le aplicará el régimen previsto en el presente Capítulo.

Artículo 49.- Armador a pequeña escala.- Se considerará armador a pequeña escala a la persona física, titular de más de un permiso de pesca y con un máximo de hasta cuatro, con embarcaciones que no superen las 10 TRB. Se le aplicarán las disposiciones generales previstas en la presente Ley, así como las normas especiales de este Capítulo, salvo las excepciones que expresamente se determinen.

Artículo 50.- Consejos Zonales Pesqueros: A iniciativa de la DINARA, se conformarán Consejos Zonales Pesqueros con el objetivo de participar en el co-manejo de los recursos en cada zona pesquera. Sus decisiones no serán vinculantes para la Administración.

Estarán integrados por:

1.- Un representante designado por la DINARA;



2.- Un representante de la Intendencia Municipal del Departamento o de los Departamentos que correspondan a la Zona;

3.- Un representante de la Prefectura Nacional Naval;

4.- Dos representantes de los pescadores agrupados;

Los miembros designados participarán en forma honoraria.

Artículo 51.- Categorización: La DINARA, en consulta con los Consejos Zonales Pesqueros, realizará una categorización por franjas, considerando las TRB por embarcación y las diversas zonas de pesca.

Artículo 52.- Derechos de acceso: El monto de los derechos de acceso a la actividad que podrá establecer el Poder Ejecutivo, se fijará de acuerdo a la categorización que resulte conforme el art. 51.

La reglamentación establecerá los porcentajes diferenciales en el precio de los derechos de acceso para quienes detenten la calidad de Armador a Pequeña Escala.

Artículo 53.- Régimen de infracciones y sanciones. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el Capítulo X, la cuantía de las multas se establecerá entre las 2 y las 100 UR para quienes se encuentren comprendidos en este Capítulo. La reglamentación considerará las figuras previstas en los arts. 48 y 49, así como a la categorización que resulte de acuerdo al art. 51.

CAPÍTULO VI REGISTRO, INFORMACIÓN Y CONTROL

Artículo 54.- Registro General de Pesca y Acuicultura. La DINARA tendrá a su cargo el Registro General de Pesca y Acuicultura.

El Registro tendrá por objeto la inscripción y actualización obligatorias de la información relativa a las actividades de pesca y acuicultura.

Artículo 55.- Contenido del Registro General de Pesca y Acuicultura. Sin perjuicio de lo que la reglamentación establezca, el Registro General de Pesca y Acuicultura registrará como mínimo:

a.- Los datos relativos a los permisos, concesiones y autorizaciones que se hayan otorgado, incluyendo: identificación personal de los titulares, especies, artes y equipos de pesca, vigencia, cuotas y zonas de captura.

Si el titular es una persona jurídica, deberá proporcionar además cuando correspondiere (art. 28 inc. 2), la información necesaria a efectos de identificar las personas físicas que la integran, administran y dirijan.

b.- Los datos atinentes a las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera, autorizadas a enarbolar pabellón nacional. Se incluirán los buques autorizados a pescar en alta mar o en aguas jurisdiccionales de terceros países.

c.- Los datos relativos a las capturas de pesca distinguiendo por especies y por zonas de captura, por pesca marítima y por pesca continental, por pesca artesanal y por pesca industrial.

d.- Los datos referentes a los sistemas de cultivo, las unidades de producción y las cantidades producidas en actividades de acuicultura.

e.- Los proyectos presentados como requisito previo al otorgamiento de un permiso; concesión y/o autorización.

f.- Los datos relativos a los buques de bandera extranjera que utilicen servicios en el país.

g.- Los infractores y las sanciones aplicadas de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones.

Artículo 56.- Deber de información. El titular de un permiso, concesión y/o autorización deberá comunicar, en las condiciones y plazos que se establezcan por vía reglamentaria, toda la información necesaria para el adecuado funcionamiento del Registro General de Pesca y Acuicultura, así como cualquier otra información que la DINARA requiera en el ejercicio de sus atribuciones de conformidad con la presente Ley y sus reglamentos.

Los funcionarios de la DINARA, que en razón del ejercicio de sus funciones de registración y contralor, obtuvieran informaciones, están obligados a guardar secreto acerca de las mismas, so pena de incurrir en falta grave. Sin perjuicio de lo anterior, y cuando así se solicite, dichas informaciones deberán ser comunicadas a las autoridades judiciales, al Poder Legislativo y otros organismos de acuerdo con la normativa vigente.

La presente disposición no afectará la difusión de datos globales o estadísticos sin mención expresa a ningún administrado.

CAPÍTULO VII
DESARROLLO, FOMENTO Y RÉGIMEN DE ACCESO A LA
ACUICULTURA
Sección I Disposiciones Generales

Artículo 57.- Acuicultura sostenible. Las actividades de acuicultura



deberán llevarse a cabo de modo que garanticen el desarrollo sostenible de la actividad; la protección del medio ambiente; la sanidad de los organismos acuáticos y la inocuidad alimentaria de los productos acuícolas.

Artículo 58.- Propiedad de los recursos y estructuras de cultivo. Se presume legalmente que las especies en cultivo, las estructuras y artes destinadas al mismo, son de propiedad del titular del proyecto, emprendimiento o centro de acuicultura.

Artículo 59.- Uso del espacio y zonificación. El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la DINARA y de los organismos competentes en la materia, confeccionará la "Zonificación de la Acuicultura Nacional".

La Zonificación deberá evaluar: los lugares marítimos y continentales en que, por el tipo de suelo, cantidad y calidad de las aguas y régimen climático, resulte apropiado el desarrollo de la acuicultura. Asimismo, deberá considerar el nivel de contaminantes provenientes de otras fuentes, en particular las domiciliarias y agroindustriales; la cercanía con áreas protegidas, la actividad turística y de recreo; así como la utilización de los recursos hídricos destinados al consumo humano.

Artículo 60.- Condiciones sanitarias. Todos los proyectos y emprendimientos de acuicultura, independientemente del título administrativo habilitante para su ejecución, deberán ejecutarse de manera que garanticen la sanidad de las especies en cultivo y la inocuidad alimentaria de los productos acuícolas.

El Poder Ejecutivo previa consulta al Consejo Consultivo de Acuicultura, reglamentará las condiciones sanitarias para el ejercicio de la actividad de acuicultura. Deberá considerar como mínimo:

- a.- El registro previo de los fármacos susceptibles de ser aplicados a las especies en cultivo;
- b.- Las medidas profilácticas de aislamiento y cuarentena;
- c.- Las obligaciones de monitoreo, control y reporte de enfermedades;
- d.- La aplicación de barreras físicas que impidan el escape de organismos cultivados e impidan el ingreso de organismos externos;
- e.- Los procedimientos para el manejo de contingencias sanitarias, incluidas zonas de cuarentena;
- f.- El destino y análisis de las aguas de desecho.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la DINARA, aprobará por resolución los programas generales y específicos en que se determinarán las medidas sanitarias adecuadas de operación, según la especie hidrobiológica utilizada o cultivada, con el fin de promover un adecuado estado de salud de la misma, así como evitar la diseminación de las enfermedades.

Artículo 61.- Efectos ambientales de la acuicultura A efectos de garantizar el desarrollo sostenible de la actividad (Artículo 57), todo centro de cultivo deberá: evitar dañar el ecosistema acuático en que se lleve a cabo; mantener la calidad y cantidad de las aguas y, respetar la capacidad de carga del cuerpo de agua en que se emplacen.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones ambientales para el ejercicio de la actividad, las medidas relativas a la fijación de densidades de producción; restricciones de uso del alimento y emisión de contaminantes.

Artículo 62.- Efectos ambientales hacia la acuicultura La autorización y emplazamiento de actividades industriales, agrícolas y ganaderas; los nuevos emplazamientos humanos; las obras de saneamiento y en general las intervenciones humanas significativas en el medio ambiente, deberán tener en cuenta los probables impactos que tales actividades pueden ocasionar en los proyectos y emprendimientos de acuicultura, de manera de minimizarlos y cuando sea posible, eliminarlos.

Artículo 63.- Procedimiento administrativo unificado (Ventanilla única). El procedimiento para la obtención de una autorización y/o concesión para desarrollar un emprendimiento relacionado con la acuicultura, se instrumentará en un único expediente que se tramitará ante la DINARA, quien oficiará como organismo de coordinación entre las diferentes unidades.

Artículo 64.- Cuantía de las multas. La cuantía de las multas se fijará entre las 100 y 5.000 UR. Las infracciones leves serán sancionadas con una multa de 100 a 999 UR; las graves con una multa de 1.000 a 2.499 UR y las muy graves con una multa de 2.500 a 5.000 UR.

Artículo 65.- Especies destinadas a la acuicultura. La importación y exportación, así como la tenencia en cautiverio, en cualquier etapa de desarrollo, con el fin de emplearlas en establecimientos de cultivos estará sujeta a la autorización previa de la DINARA. Para la importación de tales especies requerirá, además, para ingresar al país, certificado sanitario expedido por la autoridad competente del país de origen.

Artículo 66.- Plazo, causal de revocación y suspensión e indemnización. Entre otras, se establecerá por vía reglamentaria las causales de suspensión, caducidad por inactividad o revocación de las autorizaciones o concesiones que se otorguen.



Las autorizaciones y concesiones para el ejercicio de proyectos de acuicultura (art.9 lit. c) se otorgarán por un plazo de 10 años, renovable en las condiciones que fije la reglamentación.

La revocación de las autorizaciones y concesiones de acuicultura, no darán derecho a reclamo ni indemnización alguna.

Sección II.- Consejo Consultivo de Acuicultura

Artículo 67.- Consejo Consultivo de Acuicultura. Créase el Consejo Consultivo de Acuicultura como órgano asesor del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en todas las materias relacionadas con la acuicultura.

Artículo 68.- Miembros del Consejo Consultivo de Acuicultura. El Consejo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y estará integrado por:

- 1.- El Director General de la DINARA, quien actuará como Presidente.
- 2.- Un delegado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
- 3.- Un delegado del Congreso de Intendentes.
- 4.- Dos representantes de los Acuicultores.

El Consejo podrá convocar a otras dependencias con competencias específicas en algún aspecto de la acuicultura, cuando sea necesario su asesoramiento.

Los miembros designados participarán en forma honoraria.

Sección III

Artículo 69.- Beneficios Tributarios. Se aplicará a la acuicultura el régimen de exoneraciones previstas en la Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998.

Las exoneraciones tendrán un plazo de cinco años contados a partir de la promulgación de la presente ley para los emprendimientos existentes.

Los emprendimientos que se inicien gozarán del mismo beneficio por igual período, a partir del momento en que se apruebe el proyecto de explotación por la autoridad competente.

Artículo 70.- Cese de beneficios. Los beneficios fiscales previstos, cesarán inmediatamente después de constatado el cese de actividades.

En caso que el cese de actividades se determinara en aplicación de una sanción por infracción grave o, cuando se verifique la destrucción total o parcial de las instalaciones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el titular deberá abonar el importe de todos los tributos exonerados, con más los recargos y multas, al organismo de recaudación correspondiente.

CAPÍTULO VIII PROCESAMIENTO, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

Artículo 71.- Autorización. Las personas físicas y jurídicas que deseen ejercer actividades de procesamiento, transporte o comercialización de los recursos hidrobiológicos y cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley, su reglamentación y demás normas, deberán solicitar a la DINARA, según los procedimientos que se establecerán, la correspondiente Autorización de Procesamiento de Productos Hidrobiológicos, de Transporte de Productos Hidrobiológicos o de Comercialización de Productos Hidrobiológicos, previo pago de las tasas cuyo valor establecerá anualmente el Poder Ejecutivo.

Artículo 72.- Métodos de procesamiento. Los métodos de procesamiento, transporte y comercialización de los recursos hidrobiológicos deberán:

a.- Realizarse en el estricto cumplimiento de las normas de sanidad, higiene, calidad e inocuidad de los alimentos, seguridad industrial y preservación del ambiente.

b.- Ser ecológicamente adecuados, de modo que se minimicen las pérdidas y los desperdicios posteriores a la captura o extracción y, en el caso de la pesca, se mejore la utilización de las capturas incidentales en la medida que tales capturas se permitan dentro de una ordenación responsable de la pesca.

Artículo 73.- Documentación comercial. Los comerciantes, importadores y exportadores de productos de la pesca y acuicultura están obligados a presentar la documentación que acredite el origen del producto, además de su deber genérico de sujetarse a las normas de comercialización, sanidad ambiental, calidad e inspecciones que establezca la autoridad competente.

Artículo 74.- Inspección y vigilancia. La DINARA será responsable, en coordinación con las autoridades competentes en materia de salud pública y agropecuaria, de la inspección, vigilancia y control sanitario en todas las fases del proceso pesquero y acuícola, especialmente en el almacenamiento, en el manejo a bordo de los productos hidrobiológicos, así como en su transporte, distribución y comercialización.



CAPÍTULO IX COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 75.- Coordinación. Todos los órganos dependientes del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales deberán coadyuvar en las tareas de fiscalización del cumplimiento de la presente Ley y sus reglamentos, así como de las normas internacionales aplicables.

A tales efectos, facúltase a la DINARA a coordinar con las autoridades que corresponda las actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines.

CAPÍTULO X INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 76.- Infracción. Constituye infracción y será sancionada toda acción u omisión contraria a las disposiciones contenidas en la presente Ley, a las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales de los que es parte el Estado, a los reglamentos y resoluciones administrativas que se dicten en materia pesquera y acuícola.

Artículo 77.- Clases de infracciones. Las infracciones podrán ser muy graves, graves o leves, de conformidad con los artículos siguientes de la presente Ley.

Artículo 78.- Infracciones muy graves. Se considerarán entre otras, infracciones muy graves:

- 1.- Pescar con embarcaciones autorizadas para la pesca industrial en aguas continentales o en las zonas reservadas a la pesca artesanal.
- 2.- El uso y tenencia, en la pesca industrial, de artes y métodos de pesca no autorizados.
- 3.- La captura o extracción de especies diferentes a las autorizadas.
- 4.- Capturar o extraer recursos hidrobiológicos declarados en veda, o hacerlo en zonas diferentes a las señaladas en el permiso o en las áreas reservadas.
- 5.- Procesar, transportar o comercializar productos pesqueros y acuícolas cuya procedencia legal no sea posible acreditar; especies declaradas en veda o declaradas en peligro de extinción o con tallas menores a las establecidas.
- 6.- Procesar, transportar o comercializar productos pesqueros y acuícolas que entrañen riesgo para la salud pública, así como productos que no

cumplan las normas sanitarias, de inocuidad, de seguridad industrial y de preservación del ambiente

7.- El cambio de las embarcaciones empleadas por otras de mayor tonelaje para la actividad de pesca, sin la autorización correspondiente.

8.- Arrojar a las aguas plantas tóxicas, productos químicos y explosivos.

9.- La ejecución de actividades de acuicultura sin contar con la autorización o concesión pertinente.

10.- La importación o el cultivo de especies exóticas sin contar con la autorización a que se refiere el artículo 65.

11.- El incumplimiento de las condiciones ambientales a que se refiere el artículo 62.

12.- El incumplimiento de las condiciones sanitarias a que se refiere el artículo 60.

Artículo 79.- Infracciones graves. Se consideran entre otras, infracciones graves:

1.- El uso y tenencia a bordo, en la pesca artesanal, de artes y métodos de pesca no autorizados.

2.- Tratar la captura incidental de modo diferente a lo dispuesto por la DINARA.

3.- Transbordar el producto de la pesca a embarcaciones no autorizadas o disponer de dicho producto antes de llegar al puerto de desembarque.

4.- Tratar los desperdicios de modo diferente a lo dispuesto por la DINARA.

5.- Suministrar a las autoridades competentes información falsa, incorrecta o incompleta con relación a la pesca y la acuicultura.

Artículo 80.- Infracciones leves. Se considerarán infracciones leves todas las acciones u omisiones a que se refiere el Artículo 76, no comprendidas en los artículos 78 y 79 de esta Ley.

Artículo 81.- Clases de sanciones. Las sanciones a aplicar serán: apercibimiento, multa, suspensión temporal de actividades o instalaciones, clausura definitiva de las mismas y revocación del permiso, concesión o autorización.

Artículo 82.- Circunstancias atenuantes o agravantes. A efectos de la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones se tendrá en consideración:



- a.- La naturaleza y entidad de la infracción;
- b.- El dolo o la culpa del infractor, así como su eventual reincidencia;
- c.- El daño causado a terceros o el beneficio ilegalmente obtenido por el infractor;
- d.- Los daños y perjuicios causados a los recursos hidrobiológicos y al ambiente;
- e.- Cualquier otra circunstancia agravante o atenuante en relación con el evento.

A los efectos de la presente Ley, se considerarán reincidentes, los sujetos incluidos en el art. 85, cuando cometan dos o más infracciones, determinadas por resolución firme.

Artículo 83.- Cuantía de las multas. La cuantía de las multas se fijará entre las 100 y 6.000 UR. Las infracciones leves serán sancionadas con una multa de 100 a 999 UR; las graves con una multa de 1.000 a 3.999 UR y las muy graves con una multa de 4.000 a 6.000 UR.

Artículo 84.- Acumulación de sanciones. En caso de violación a más de un precepto normativo, podrán acumularse las sanciones que debieran aplicarse.

Además de las sanciones previstas y en forma accesoría a éstas, podrá disponerse el decomiso de productos y el decomiso secundario sobre los vehículos, embarcaciones, instrumentos y artes de pesca, directa o indirectamente vinculados en la comisión de la infracción, sin importar a qué título los posea el infractor.

Artículo 85.- Responsabilidad. Los titulares de permisos, concesiones y autorizaciones, así como los armadores pesqueros, serán los responsables directos por las infracciones que se determinen en aplicación de la presente ley.

Artículo 86.- Destino de decomisos. Los equipos, bienes, artes de pesca, y productos acuáticos y acuícolas que hayan sido decomisados serán subastados o donados a beneficio social o, en su caso, destruidos.

Artículo 87.- Funcionarios de DINARA. Queda absolutamente prohibido a todos los funcionarios de la DINARA, prestar servicios de cualquier índole a empresas pesqueras, nacionales o extranjeras, relacionadas directa o indirectamente con el sector pesquero.

Artículo 88.- Título ejecutivo. Las resoluciones que establezcan los importes que resulten de la aplicación de multas, de las erogaciones que debe realizar la DINARA en los procedimientos de decomiso de productos, depósito y conservación de los mismos cuando fuere posible, así como por el mantenimiento, conservación y traslado de buques, instrumentos y artes de pesca y en general de todas las prestaciones que la Ley establezca, constituirán título ejecutivo.

Serán competentes para entender en los procesos correspondientes, los Juzgados Letrados de Primera Instancia.

Artículo 89.- Comunicación de sanciones. Toda sanción deberá comunicarse al Registro General de Pesca y Acuicultura a efectos de su inscripción.

Previo al otorgamiento o renovación de una autorización, permiso o concesión, se deberá consultar al Registro a efectos de relevar la existencia de inscripciones relativas a sanciones con respecto al interesado. La constatación de tal extremo inhabilitará, salvo resolución fundada en contrario, la expedición del permiso, autorización o concesión solicitada.

Artículo 90.- Medidas urgentes. El Director General de la DINARA, mediante resolución fundada, tomará las primeras y más urgentes medidas a efectos de hacer cesar de forma inmediata la realización de una actividad contraria a las normas vigentes nacionales e internacionales. Entre otras y con la colaboración de las autoridades competentes, podrá solicitar la detención de la embarcación infractora para su conducción al puerto uruguayo más cercano.

Corresponderá luego, la prosecución de todas las actividades administrativas concernientes a la determinación e imposición de la sanción pertinente.

CAPÍTULO XI

Artículo 91.- Derogación. Deróganse todas las leyes y decretos que se opongan directa e indirectamente a la presente Ley.

Artículo 92.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo de 180 días.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity. Some appear to be names, while others are initials or abbreviations. The ink is dark and the background is white.